

05001310500120220024800 05001310500120220005600 CONCEPTO COMITÉ DE CONCILIACIÓN

Christian Camilo Castañeda Rave <coordinador.1@findlay.com.co>

Lun 26/08/2024 8:04

Para:Juzgado 01 Laboral Circuito - Antioquia - Medellín <j01labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

2 archivos adjuntos (470 KB)
ALVARO OVIDIO ORTEGA CARDONA.pdf; LEONARDO DE JESUS VELEZ MERINO.pdf;

Cordial saludo.

SEÑORES
JUZGADO PRIMERO (01) LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
E.S.D.

ASUNTO: CONCEPTO COMITÉ DE CONCILIACIÓN

BIZAGI	DESPACHO	23 DIGITOS	NOMBRE DEMANDANTE	CC DEMANDANTE	TIPO DE PROCESO	FECHA AUDIENCIA DD:MM:AA
2023_1408759	JUZGADO 001 LABORAL DE CIRCUITO DE MEDELLÍN	05001310500120220024800	LEONARDO DE JESUS VELEZ MERINO	70077754	ORDINARIO LABORAL	27/08/2024
2022_17361470	JUZGADO 001 LABORAL DE CIRCUITO DE MEDELLÍN	05001310500120220005600	ALVARO OVIDIO ORTEGA CARDONA	8397480	ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA	27/08/2024

--

CHRISTIAN CASTAÑEDA
Coordinador
Unión Temporal Litis UT 2023.
"Si lo puedes soñar, lo puedes lograr".

	Certificación de la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
			FECHA:	

CERTIFICACIÓN NO. 058482023

La Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial

CERTIFICA


Que tal y como consta en el Acta No. 070-2023 del 28 de abril de 2023 del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, respecto del caso **LEONARDO DE JESUS VELEZ MERINO** identificado(a) con cédula de ciudadanía No **70077754**, en proceso bajo radicado No **05001310500120220024800**, quien pretende; 1. Declarar que el traslado del demandante al RAIS administrado por la AFP Protección SA al RPM administrado por Colpensiones, es nulo por la ilegalidad del acto e ineficaz por vicios de consentimiento (engaño y error) y violación al deber objetivo de información en detrimento de los intereses del demandante mi poderdante. 2. Declarar que el demandante pertenece al RAIS administrado por Protección SA. 3. Declarar que Protección SA, es competente para reconocer la pensión de vejez., dicho órgano decidió de manera unánime:

NO proponer fórmula conciliatoria, en consideración a lo siguiente:

El señor LEONARDO DE JESUS VELEZ MERINO nació el 26 de enero de 1955 y se afilió al ISS en el año 1974. Indica el demandante que en el mes de agosto de 1996 se trasladó al RAIS administrado por la AFP Protección SA. El 9 de septiembre de 2016, la AFP mencionada entrega al demandante una proyección pensional en donde se le indico una mesada pensional de \$1.830.000 a los 62 años de edad, en dicha oportunidad, el asesor del fondo privado le indico al demandante que tenía la posibilidad de recuperar el régimen de transición y por consecuencia retornar al RPM. Con base en esto, el demandante realiza el trámite de afiliación ante Colpensiones, entidad que el día 19 de septiembre de 2018, con base en la providencia SU 062 de 2010, acepta el traslado del demandante.

En primer lugar, es dable mencionar que los presupuestos facticos introducidos en el libelo demandatorio, dan cuenta que la parte demandante se trasladó de régimen pensional de manera libre y voluntaria, siendo imposible extractar la viabilidad de las pretensiones incoadas simplemente con los dichos plasmados en la demanda, pues no es posible inferir intensiones, acciones u omisiones de la simple solicitud de afiliación.

De otro lado, la parte actora sustenta la ineficacia de su afiliación en la mala ejecución del deber del buen consejo y debida asesoría que tienen las AFP, situación que ubica al margen de la Litis a Colpensiones, toda vez que no hubo injerencia en los hechos constitutivos de la acción, es decir que se debe atener a lo extractado del debate probatorio, hasta tanto el traslado efectuado a Colpensiones tiene plena validez, esto significa que la afirmación de ineficacia en la afiliación no se encuentra estimada, así como la omisión de información vital para efectuar el cambio de régimen pretendido.

	Certificación de la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
			FECHA:	

Es entonces que se trata de hechos que salen de la esfera actuarial y obligacional de Colpensiones, dado que la parte demandante, solicito su traslado de régimen pensional después de recibir asesoría por parte del Fondo Privado de Pensiones, sin que Colpensiones tenga relación de causalidad y conocimiento de lo informado al demandante antes de efectuar el traslado de régimen pensional.

Aunado a esto, no es dable proponer formula conciliatoria por cuanto se estaría desconociendo además de los principios administrativos de la entidad, el ordenamiento jurídico que avoca el asunto en pugna, es decir lo establecido en el art 2 de la ley 797 de 2003 que a su tenor expone:

“artículo 2o. Se modifican los literales a), e), i), del artículo 13 de la ley 100 de 1993 y se adiciona dicho artículo con los literales l), m), n), o) y p), todos los cuales quedarán así:

artículo 13. Características del sistema general de pensiones.

(...)

e) los afiliados al sistema general de pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez; (...)

En este sentido, es preciso señalar que la parte demandante a la fecha cuenta con más de 52 años de edad, incumpliendo así el requisito legal para poder acceder al traslado pretendido y revistiendo de validez el actuar administrativo de Colpensiones frente a la solicitud incoada por la parte demandante.

Ahora bien, respecto de la jurisprudencia que estudia el asunto, la honorable Suprema de Justicia en sentencia SL 1452 de 2019, en lo que nos pertenece, aduce que son las administradoras de fondos de pensiones las encargadas de demostrar que se ejecutó de forma correcta el mandato de la debida asesoría y el buen consejo, excluyendo a mi representada de la facultad decisoria, de tal forma que la obliga a mantenerse al traste con lo extractado en la etapa probatoria del caso de autos.

En otra arista, se tiene que la Administradora Colombiana de Pensiones, frente a las pretensiones principales que fundan el libelo demandatorio, expresamente carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que como aquellas solicitudes van dirigidas a la declaración de la ineficacia de la afiliación de la parte demandante, como consecuencia de la fragmentación del deber de buen consejo al que están obligados los Fondos Privados, será el juez de autos, el llamado a esclarecer la petición presentada por el demandante de manera precisa, concreta y de fondo en este proceso declarativo, pues esta administradora resulta un sujeto exógeno en los hechos constitutivos de la acción judicial, toda vez que no tuvo ninguna clase de participación o injerencia en el acto constitutivo del traslado de régimen pensional y aunado a esto, se desconoce las circunstancias que dieron lugar a dicho supuesto. En consecuencia, Colpensiones no se encuentra legitimada en la causa por pasiva en el presente asunto, al respecto, la Corte constitucional en la Sentencia T- 416/97 M.P. José Gregorio Hernández, adujo:

	Certificación de la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
			FECHA:	

“la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo. La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material”.


Es por esto que esta administradora carece de legitimación en la causa para pronunciarse sobre supuestos facticos tangentes a su conocimiento, pues se itera que la carga de la prueba en lo que respecta a la correcta ejecución de las obligaciones de debida asesoría y buen consejo radican en cabeza de la AFP demandada, pues es la entidad que origino el traslado de régimen pensional y es quien tiene el conocimiento de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que obedecieron al mismo.

Ahora bien, se debe tener en cuenta que la parte demandante, por voluntad propia, sin circunstancias que invaliden su actuar, fue quien decidió realizar el traslado, pues de acuerdo al soporte probatorio aportado, se tiene que la parte demandante se trasladó del RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD, AL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA libre y voluntariamente, no siendo procedente que después de un vasto interregno de tiempo, se funde la pretensión en el desconocimiento de las directrices del régimen de Ahorro Individual y del Régimen de Prima Media, pues no es posible verificar las intenciones que avocan el acto de afiliación, solo con el análisis del documento físico.

Adicionalmente, al momento de haber realizado el traslado de régimen pensional, tenía la capacidad de discernir cuál de los dos regímenes le era más favorable, cuestionando y formulando las respectivas dudas que a bien tuviere, toda vez que tratándose de un derecho tan importante como el pensional, y encontrándose con una prestación aprobada y proyectada en el RAIS, la obligación mínima exigida para la parte demandante era la de informarse al momento de la suscripción por lo que se considera que su vinculación se dio de manera “libre, espontánea y sin presiones”; más aún cuando el formulario de afiliación se evidencia correctamente diligenciado con la rúbrica de la parte demandante, obligándose así a respetar lo consignado en dicho documento pues se da cumplimiento a los requisitos preceptuados por el artículo 1502 del Código Civil, así:

“artículo 1502. para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario:

- 1o.) que sea legalmente capaz.*
- 2o.) que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio.*
- 3o.) que recaiga sobre un objeto lícito.*
- 4o.) que tenga una causa lícita. la capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin el ministerio o la autorización de otra.”*

	Certificación de la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
			FECHA:	

Bajo este panorama se itera que debe ser la parte demandante quien pruebe la mala fe de la sociedad demandada para asesorarlo bajo distorsión, engaño o cualquier tipo de acciones contrarias a una adecuada aceptación.

DEBER DE INFORMACIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES

1Primera Etapa: el Decreto 663 de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, estableció en el numeral 1. ° del artículo 97, la obligación de las entidades de” suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado”


Segunda etapa: La ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010, reglamentaron los derechos de los consumidores (precisando los principios y el contenido básico de la información) y establecieron el deber de asesoría y buen consejo a cargo de las administradoras de pensiones.

Tercera etapa: la Ley 1748 de 2014, el Decreto 2071 de 2015 y la Circular Externa N.° 016 de 2016 de la Superintendencia Financiera, establecieron que los usuarios del sistema pensional tienen el derecho a la doble asesoría, como condición previa para que proceda el traslado entre regímenes, esto es, a obtener información de asesores y promotores de ambos regímenes, con el fin de que se formen un juicio imparcial y objetivo sobre las características, fortalezas y debilidades de cada uno, así como de las condiciones y efectos jurídicos del traslado.

Así las cosas, el análisis de la información suministrada por la AFP y el alcance de la asesoría que debió brindar al momento de la afiliación, deben ser valoradas bajo la normatividad vigente para la fecha de suscripción del formulario o de la materialización del traslado;

No es razonable ni jurídicamente válido imponer a las administradoras obligaciones y soportes de información no previstos en el ordenamiento jurídico vigente al momento del traslado de régimen, pues tal exigencia desvirtúa el principio de confianza legítima, teniendo en cuenta que el principio de legalidad y el debido proceso, no consisten solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad para interponer recursos, sino que exige, además, como lo expresa el artículo 29 de la Carta, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se juzga.

El juzgamiento de la conducta de los fondos con base en normas inexistentes, no tiene justificación jurídica alguna y viola gravemente el debido proceso de Colpensiones, quien sin haber participado en el trámite de traslado es quien debe afrontar la carga de la prestación. Por lo anterior, no se deberá validar por la Entidad como cierta la imputación que se le hace a los fondos privados en tratándose de una fecha en la que no estaba a su cargo las exigencias que hoy en día se reclaman y que en caso de no cumplirse afectarán los intereses de un tercero ajeno a dicha relación contractual. Es menester además traer a colación la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín dentro del proceso con radicado 05001310500720150129501, la cual en su aparte pertinente arguye:

	Certificación de la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
			FECHA:	

“permitir el traslado de una entidad administradora de pensiones a otra, puede poner en riesgo la sostenibilidad del sistema, aumentar los costos de los servicios administrativos y financieros, y desestimular la obtención de mayores niveles de rentabilidad a través de inversiones de mediano y largo plazo, dado que la posibilidad de traslado quedaría sujeta al capricho del pensionado.”

Bajo este entendido, declarar la ineficacia del traslado de régimen pensional, desconocería los preceptos constitucionales del Acto Legislativo 01 de 2005 en lo que concierne al principio de sostenibilidad financiera pues este hecho genera una descapitalización infundada de la entidad.

Por lo tanto, es necesario corroborar la inducción a error que alega la parte actora que la hizo recaer el fondo administrador del RAIS al momento de su traslado al RPM, a efectos de determinar la nulidad del mismo por la autoridad competente.

Así las cosas, en el asunto que hoy nos ocupa, se dejó demostrado que, a todas luces, jurídica, jurisprudencial y fácticamente se manifiesta la imposibilidad de declarar la ineficacia de la afiliación al RPM, siendo necesaria la declaración judicial con base al soporte probatorio aportado al libelo demandatorio, para poder determinar si el fondo privado incumplió con su deber de asesoría y buen consejo al momento de recomendarle al demandante el trasladarse al Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

Ahora bien, respecto a la condena de intereses moratorios, el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se tiene que la misma va dirigida única y exclusivamente a la AFP Protección, por lo que no es necesario un pronunciamiento jurídico al respecto.

Finalmente, frente a la solicitud de condena en costas a Colpensiones, se precisa indicar que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del expediente: 12736 del año 2000, M.P. Doctor GERMAN G. VALDES, cambió su criterio, bajo el entendido de que Colpensiones actuó de buena fe, conforme lo indican las características de sus funciones y, por tanto, debe declararse exenta de culpa, razón por la cual no es dable la procedencia de dicha condena.

Por lo antes expuesto, no es posible proponer acuerdo conciliatorio.

La presente certificación se emite en la ciudad de Bogotá a los 02 días del mes de mayo de 2023.



MARIA ISABEL CAMPO MARTINEZ
Secretaria Técnica de Comité de Conciliación y
Defensa Judicial de Colpensiones